

Doctor

CARLOS ARTURO GRISALES LEDESMA

JUZGADO QUINCE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CALI

Vía e-mail

Referencia: Medio de control de reparación directa promovido por
ROBINSON LEÓN RENGIFO y otros VS. DISTRITO ESPECIAL
DE SANTIAGO DE CALI- SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA.

Radicado: 2023-144

Asunto: Contestación a la demanda y al llamamiento en garantía

FRANCISCO J. HURTADO LANGER, identificado como aparece al pie de mi firma, profesional en derecho que actúa conforme a la designación que consta en el certificado de existencia y representación legal de la firma HURTADO GANDINI DAVALOS ABOGADOS S.A.S., obrando como apoderado judicial de SBS SEGUROS COLOMBIA S.A., sociedad legalmente constituida, con NIT 860.037.707-9, con domicilio principal en Bogotá D.C., representada legalmente por RICARDO SARMIENTO PIÑEROS, me permito contestar la demanda y llamamiento en garantía de la referencia, según se indica a continuación:

I. OPORTUNIDAD PARA PRESENTAR ESTE ESCRITO

El 26 de abril del 2024 la apoderada del Distrito de Cali remitió a mi mandante correo electrónico de notificación personal del Auto No. 159 del 19 de abril del 2024, dictado dentro del proceso en referencia, por medio del cual se admitió el llamamiento en garantía. De conformidad con el inciso 4 del artículo 199 del CPACA, modificado por el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021, esta notificación se entendió surtida una vez transcurridos dos (2) días hábiles desde el envío del mensaje de datos, es decir, el día 30 de abril de 2024.

En ese orden de ideas, el término de 15 días para contestar la demanda debía transcurrir de la siguiente manera:

2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22 y 23 de mayo del 2024, inclusive.¹

En consecuencia, este escrito es presentado en forma oportuna.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

1. FRENTE A LOS HECHOS

AL HECHO PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO.- No me consta lo consignado en estos hechos debido a que corresponden a información de la esfera personal del demandante, y que no hubiera podido conocer mi representada en su calidad de compañía aseguradora. Así pues, me atengo a lo que se acredite en las siguientes etapas procesales.

AL HECHO CUARTO.- No me consta lo consignado en este hecho debido a que corresponden a las circunstancias laborales del demandante que no hubiera podido conocer mi representada en su calidad de compañía aseguradora. Sin embargo, es relevante mencionar que el demandante no aporta transacciones bancarias, ni libros contables, ni ningún contrato de prestación de servicios, para acreditar sus ingresos como trabajador independiente. Así pues, me atengo a lo que resulte probado en el proceso.

AL HECHO QUINTO.- No me consta lo expuesto en este hecho debido a que corresponden a las supuestas circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurre el suceso, lo cual no hubiese podido conocer mi representada en su calidad de compañía aseguradora. Así pues, me atengo a lo que se acredite en las siguientes etapas procesales.

AL HECHO SEXTO.- No me consta que la reproducción videográfica aportada hubiese sido grabado momentos posteriores del accidente, puesto que no es posible comprobar la hora ni el día, ni las personas que hacen parte de este. Igualmente, esta no es una prueba del hecho generador del daño, puesto que en él no se muestra la forma en que ocurrió el accidente.

AL HECHO SÉPTIMO Y OCTAVO .- No me consta lo consignado en este hecho pues refiere a actuaciones realizadas entre el demandante y las clínicas mencionadas, y que mi representada no hubiera podido conocer en su condición de entidad aseguradora. Por ende, me atengo a lo que acrediten las pruebas documentales.

¹ Los días 1, 4, 5, 11, 12, 13, 18 y 19 de mayo del 2024 no corrieron términos por ser días inhábiles.

AL HECHO NOVENO.- No me consta lo consignado en este hecho pues refiere a un peritaje realizado aproximadamente un año después del accidente por una persona externa a los involucrados, cuya veracidad sobre la información que predica debe ser controvertida dentro del proceso. Por lo tanto, me atengo a lo que resulte probado en las siguientes etapas procesales.

AL HECHO DÉCIMO.- No me consta lo consignado en este hecho pues refiere a circunstancias que rodean la salud del demandante que no hubiera podido conocer mi representada en su calidad de compañía aseguradora, por lo tanto, me atengo a lo que resulte probado en las historias clínicas aportadas.

AL HECHO DÉCIMO PRIMERO.- Lo contenido en este numeral no es un hecho, sino una consideración del demandante sobre el objeto del litigio, de tal forma que, solo le compete al juez del despacho determinar la certeza frente al nexo causal entre el daño y la conducta del Distrito.

AL HECHO DÉCIMO SEGUNDO.- En este numeral se consignan varios hechos que se contestan de la siguiente forma:

No me consta que las lesiones sufridas por el demandante le producen graves secuelas, puesto que son condiciones que rodean la salud de este, y no hubiera podido conocer mi representada en su calidad de compañía aseguradora. Por lo tanto, me atengo a lo que se acredite en las siguientes etapas del proceso.

No es cierto que hay un daño probado, puesto que en la etapa procesal en la cual nos encontramos aún no se han controvertido las pruebas para determinar su valor probatorio.

No es cierto que la presencia de un hueco en la vía configure el nexo causal, pues para esto el demandante, además, debe explicar las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió el accidente.

No me consta que las lesiones padecidas por la víctima se deban a una conducta u omisión del Distrito, toda vez que, para llegar a ese punto, se debe establecer el nexo causal a partir de las condiciones de modo, tiempo y lugar del accidente, lo cual no se encuentra acreditado.

En última instancia, que la demandada deba responder por los perjuicios ocasionados no es un hecho, sino una consideración que solo le compete establecer al juez del despacho.

DEL HECHO DÉCIMO TERCERO AL DÉCIMO SEXTO.- Lo consignado en estos numerales no son hechos, sino fundamentos de derecho del objeto del litigio y apreciaciones subjetivas del apoderado de la parte demandante que resultan inoportunas en esta etapa procesal, y cuya certeza solo le compete al Despacho definir.

AL HECHO DÉCIMO SÉPTIMO.- No me consta lo consignado en este hecho debido a que corresponde a información de la esfera personal del demandante que no hubiera podido conocer mi representada en su calidad de compañía aseguradora. Así pues, me atengo a lo que se pruebe dentro del proceso.

AL HECHO DÉCIMO OCTAVO.- Es cierto que en el acápite de pretensiones de la demanda se ha solicitado dicha suma de dinero por concepto de daño a la salud. No obstante, la respectiva interpelación contra esta solicitud de hará en las excepciones de mérito.

AL HECHO DÉCIMO NOVENO.- No me consta lo consignado en este hecho, puesto que se trata de la esfera personal del demandante que no hubiera podido conocer mi representada en su calidad de compañía aseguradora. Por lo tanto, me atengo a lo que resulte probado en el proceso, en especial, según lo consignado en un dictamen de pérdida de la capacidad laboral emitido por la entidad correspondiente.

AL HECHO VIGÉSIMO.- Lo consignado en este numeral no es un hecho, sino una consideración del apoderado de la parte demandante sobre el objeto del litigio, la cual resulta inoportuna en esta etapa procesal, pues su certeza no se encuentra probada.

AL HECHO VIGÉSIMO PRIMERO.- Lo consignado en este numeral no es un hecho, sino una solicitud al juzgado, que no le compete a mi representada reconocer.

AL HECHO VIGÉSIMO SEGUNDO Y VIGÉSIMO TERCERO. No me consta lo consignado en estos hechos puesto que se trata de actuaciones en las que solo pudieron intervenir el demandante y la demandada, y, por ende, no hubiera podido conocer mi representada en su calidad de compañía aseguradora.

2. FRENTE A LAS PRETENSIONES

Me opongo a cada una de las declaraciones y pretensiones de la demanda, pues carecen de fundamentos fácticos, jurídicos y probatorios que hagan viable su prosperidad.

Lo anterior, debido a que la parte demandante no logra, siquiera de forma sumaria, demostrar los elementos que configurarían la eventual responsabilidad en cabeza de la parte demandada, ni da razón que justifique la desproporción de sus pretensiones.

Evidenciando que no se constituyen las premisas fácticas y jurídicas que configuran los elementos de la responsabilidad que se pretende, y en lo que a ella respecta no hay prueba alguna que pueda soportar las pretensiones de la demanda, me opongo a todas ellas por considerarlas improcedentes.

En ese orden de ideas, se formulan las siguientes:

3. EXCEPCIONES DE MÉRITO

3.1. Inexistencia de imputación fáctica por ausencia de claridad sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar

En el presente caso no está demostrada la relación de causalidad entre la conducta del Distrito y el daño alegado por la parte actora. Dentro de los requisitos que de tiempo atrás la ley, la doctrina y la jurisprudencia han determinado para que surja la responsabilidad del Estado está el denominado nexo causal o la imputación fáctica. Esto no es otra cosa que la relación o vínculo que debe existir entre el hecho u omisión y el daño. En este orden de ideas, si no hay nexo causal, no surge responsabilidad alguna y, por ello, en el caso que nos ocupa no puede condenarse a la parte demandada, cuando su conducta nada tuvo que ver con el resultado dañoso o, al menos, **no hay prueba de ello**.

Para probar la existencia del nexo causal es necesario que la causa real, fáctica, sea aquella determinante en el acaecimiento del hecho, lo cual no se refleja en los hechos de la demanda. La jurisprudencia nacional ha avalado esta posición dentro de sus pronunciamientos:

(...) la jurisprudencia nacional ha utilizado como método para identificar la 'causa' del daño, la teoría de la causalidad adecuada, según la cual, sólo es causa del resultado, aquella que es suficiente, idónea y adecuada para la producción del mismo (...). Así lo señaló el Consejo de Estado en sentencia de 22 de junio de 2001, con ponencia del Consejero Doctor, Ricardo Hoyos Duque: '(...) es claro que sólo alguna o algunas de las causas que intervienen en la realización del daño son jurídicamente relevantes. Para establecer cuál es la determinante en la producción del daño se han ideado varias teorías y aunque su validez no es absoluta pues con ninguna de éstas puede obtenerse la solución de todos los casos concretos, sí constituyen ayudas metodológicas importantes. La teoría de la causalidad adecuada es la de mayor acogida en la jurisprudencia, (...). Según esta teoría, sólo los acontecimientos que normalmente producen un hecho pueden ser considerados como la causa del mismo. Por lo

tanto, un comportamiento es el resultado de un daño, si al suprimirlo es imposible explicar el resultado jurídicamente relevante (...) ² (destacado fuera del texto original).

Por esta misma senda se pronunció el Consejo de Estado:

La equivalencia de condiciones fue sustituida –en la jurisprudencia de esta Corporación– por la teoría de la causa adecuada, de acuerdo con la cual *“de todos los hechos que anteceden la producción de un daño solo tiene relevancia aquel que, según el curso normal de los acontecimientos, ha sido su causa directa e inmediata”*. Esta teoría fue acuñada e implementada, por el rechazo a la equivalencia de condiciones, *“[...] pues deshumanizaría la responsabilidad civil y permitiría, absurdamente, buscar responsables hasta el infinito”*. Así pues, en aras de una racionalización, el juicio de responsabilidad se enfocó en lo que cabría esperar normalmente, bajo la premisa de que un sujeto sólo está obligado a resarcir un perjuicio, cuando este sea razonablemente esperado y previsible para un observador objetivo ³.

Para encontrar tal causalidad se debe, en primera medida, identificarse con suficiencia las circunstancias que rodearon el suceso lo cual realmente no ha acreditado la contraparte. **Probar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió un suceso del cual se reclama una responsabilidad es sumamente fundamental.** Así lo ha mencionado jurisprudencia del Consejo de Estado, en la cual fue imposible probar que una persona que conducía una moto cayó en una alcantarilla sin tapa, a falta de prueba frente a las condiciones de tiempo, modo y lugar en los que ocurrió el accidente, así expresa esta:

“Ahora bien, con las pruebas relacionadas no hay certeza para la Sala que el accidente sufrido por el señor (...) ocurrió porque este cayó en la moto que se transportaba en una alcantarilla que se encontraba sin tapa, como lo aduce la demanda, **pues era necesario haber establecido plenamente el sitio o dirección exacta del accidente y demás datos pertinentes, como eran las circunstancias de tiempo, modo, y lugar en que se presentaron los hechos y poder el Tribunal hacer la valoración respectiva para efecto de concluir si le cabía responsabilidad a la entidad pública, pues determinado el sitio preciso del accidente y si existía la mentada alcantarilla sin tapa, era del caso establecer a que entidad pública le correspondía la conservación y mantenimiento de**

² CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Civil. Magistrado ponente: Ariel Salazar Ramírez. SC13925-2016. Radicación 05001-31-03-003-2005-00174-01. Bogotá D.C., treinta de septiembre de dos mil dieciséis.

³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 29 de noviembre de 2019. Exp. 05001-23-31-000-2002-02333-01

la vía, de eso haber sido así⁴ (resaltado fuera de texto)

Asimismo, reciente jurisprudencia relacionada a la existencia de obstáculos en la vía ha indicado que la existencia de un hueco en la vía no es un hecho suficiente por sí solo, para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado en caso de producirse un daño por ello, ya que este debe ir acompañado de la acreditación del obstáculo como causa eficiente del daño, así se expresa que:

“A pesar de que obra prueba en el expediente que demuestra que, en efecto, sobre la vía en la cual se produjo el hecho existencia huecos, no se probó que estos hubieran incidido en la causación del daño padecido por los demandantes, dado que no está demostrado que la colisión se hubiera producido, efectivamente, al caer el vehículo en uno de estos. Se insiste, las fotografías que obran en el expediente dan cuenta de esas fallas sobre la vía, pero no demuestran las circunstancias en las cuales se produjo el accidente, ni siquiera se tiene prueba de la dimensión de tales huecos, de tal manera que tampoco puede inferirse la existencia de ese nexo causal.”⁵

Bajo ningún razonamiento indiciario o descripción detallada de los hechos, se explica cómo la causa eficiente del accidente se debe a la presencia de un hueco en la vía. El demandante no logra establecer la profundidad del hundimiento, ni explicar en qué medida impide el tránsito normal en esta vía, o si la ocurrencia del accidente era inevitable estando el demandante en cumplimiento de las normas de tránsito y los límites de velocidad.

Además, no se aportó ningún medio probatorio oficial que permita identificar las condiciones iniciales en las que ocurrió el accidente, tales como el Informe Policial de Accidentes de Tránsito -IPAT- o croquis, siendo un documento emitido por la autoridad de tránsito donde se describen los pormenores de los accidentes viales, siendo la recolección primaria de datos más cercana a los hechos, orientada a la identificación clara y probable de la causa. De tal manera que, en ausencia de esta, las condiciones iniciales que rodearon el accidente son inciertas.

Asimismo, el demandante intenta establecer el nexo causal únicamente desde las conclusiones expresadas por el peritaje aportado. Sin embargo, es importante considerar que dicho peritaje se limita a realizar una descripción de las medidas de largo y ancho de un hueco, que además bien podrían no encontrarse acorde con las medidas al momento de los hechos, ya que este fue realizado por la perito un año después del accidente. Ahora

⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso administrativo, Sección Tercera. 29 de enero de 2014 MP Carlos Alberto Zambrano

⁵ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. 19 de marzo de 2021 MP Maria Adriana Marín.

bien, de ninguna forma en el informe se logra explicar cómo la trayectoria del vehículo, la ubicación del hueco, tamaño y profundidad son determinantes en la ocurrencia del accidente, y que el demandante no hubiera podido superar aun en cumplimiento de la normatividad de tránsito. Se reitera que, no se trata de solamente alegar la existencia de un hueco en la vía, sino las condiciones que implican que este sea la causa adecuada del daño. Así, aun cuando la perito concluye que existe una relación de causalidad, su afirmación tiene una ausencia de argumentos frente a las condiciones que implica que esto sea así.

En síntesis, el demandante no aporta pruebas que demuestren suficientemente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió el accidente; adicionalmente, si bien intenta probar la existencia de un hueco en la vía, no acredita que el mismo haya sido la causa eficiente del daño que alega. Todo ello, conlleva necesariamente a la negativa de las pretensiones de la demanda, por ausencia de demostración del nexo causal o imputación fáctica.

3.2. Exoneración por hecho exclusivo de la víctima de la víctima

Sin perjuicio de que las circunstancias de tiempo, modo y lugar no son claras ni fueron acreditadas por la parte demandante siendo ello su carga, de las escasas pruebas aportadas es posible inferir que las actuaciones del demandante fueron determinantes sobre la generación del daño, y, por ende, es necesario explicar por qué todos los hechos e indicios apuntan a que la caída del señor Robinson León Rengifo obedece a su propia conducta, y configurarían el nexo a partir del hecho de la víctima.

El accidente supuestamente ocurrió a las 11:00 p.m., lo que indica poco tráfico a estas horas de la noche. Según el video aportado, el suelo se encontraba mojado, lo que indica que había llovido en la zona. Además, la velocidad máxima permitida en esta calle es de 30 km/h, como lo indica una señal de tránsito del lugar del accidente.



(Foto tomada de Google maps sobre la calle 23 con calle 32Bis)

A partir de estos hechos, la conducta de un conductor prudente debería estar enmarcada en una velocidad baja, o al menos dentro del límite permitido, lo que permite prever la presencia de obstáculos en la vía, evitarlos o sobrepasarlos con precaución y ampliar el tiempo de reacción ante la proximidad de riesgos, que se presentan no solo por el estado de la vía, sino también por causas naturales como la lluvia. Esto también fue declarado dentro del peritaje aportado:

Un tiempo elevado de reacción planteara la necesidad de evaluar la agilidad mental, los conocimientos o la experiencia de los usuarios en la vía. Si la velocidad es alta se tienen más poco tiempo para reaccionar ante lo inesperado.

(Pág. 61 anexos de la demanda, subrayado propio)

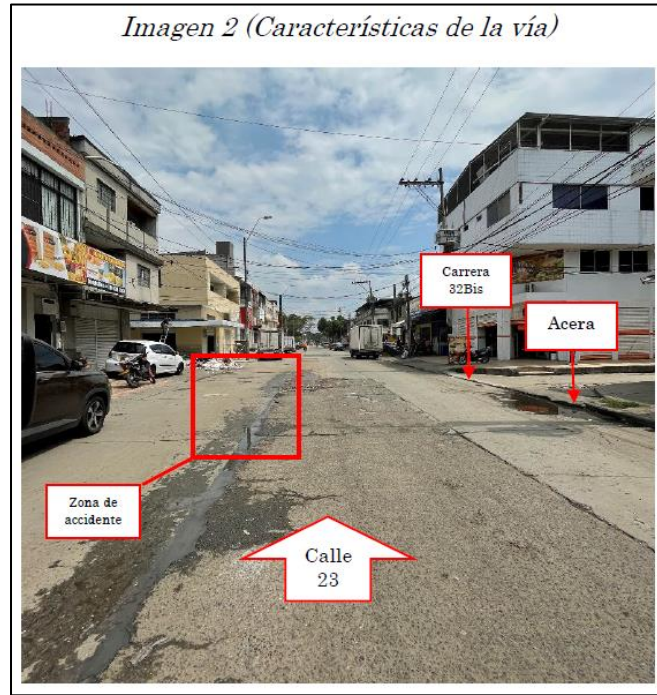
También, es relevante recordar el deber de cuidado que recae sobre los motociclistas, como lo estipula el artículo 95 del Código de Tránsito, en el que se establece la obligación de respetar las señales, normas de tránsito y límites de velocidad. Asimismo, el artículo 108 del mismo código, en su último inciso, enfatiza que **"el conductor deberá tener en cuenta las condiciones del suelo, la humedad, la visibilidad, el peso del vehículo y otras condiciones que puedan afectar la capacidad de frenado, manteniendo una distancia prudente con el vehículo que lo precede."** Lo anterior, entendiendo que la conducción de vehículos implica estar alerta a las condiciones del entorno vial y respetar el deber de autocuidado, comprendiendo que es una actividad riesgosa que puede resultar en accidentes.

Adicionalmente, según el mismo dictamen pericial aportado por la parte demandante, el accidente se produjo en la parte central de la vía, con lo cual se confiesa y evidencia un incumplimiento de las normas de tránsito, pues el artículo 94 del Código Nacional de Tránsito establece que las motocicletas deben transitar por el carril derecho y a máximo un metro de la orilla:

ARTÍCULO 94. NORMAS GENERALES PARA BICICLETAS, TRICICLOS, MOTOCICLETAS, MOTOCICLOS Y MOTOTRICICLOS. <Ver Notas del Editor> Los conductores de bicicletas, triciclos, motocicletas, motociclos y mototriciclos, estarán sujetos a las siguientes normas:

Deben transitar por la derecha de las vías a distancia no mayor de un (1) metro de la acera u orilla y nunca utilizar las vías exclusivas para servicio público colectivo.

Y el accidente, como se dijo, aparentemente se produjo en el siguiente sector:



En suma, el indicio más probable como causa eficiente resulta en que: el demandante no tuvo en cuenta la señalización ni las condiciones climáticas para transitar a una velocidad que le permitiera un tener margen de reacción y precaución, dentro del cual el accidente difícilmente se hubiera producido; y, además, incumplió las normas de tránsito pues circulaba por un carril que no lo era permitido. Por lo tanto, se puede afirmar que el señor Robinson León Rengifo, al no cumplir con estos deberes y conducir a una velocidad superior a la permitida, creó las condiciones que propiciaron su caída, configurando así el nexo causal.

3.3. Insuficiente de acreditación de la imputación jurídica

De la misma forma, aun cuando no hay certeza si este hueco pudiera causar tal accidente, vale analizar si la persona jurídica demandada, el Distrito, incurre en una acción u omisión imputable al caso. En ese sentido, vale mencionar la jurisprudencia del Consejo de Estado frente a la falla del servicio en casos de huecos en la vía, en la cual se entiende únicamente en dos supuestos en que la misma puede predicarse, a saber:

“De la misma manera, la Sala ha determinado la responsabilidad por omisión del deber de

mantenimiento de carreteras en dos eventos: i) cuando se ha dado aviso a la entidad sobre un daño en la vía, que impide su uso normal y no es atendida la solicitud de arreglarlo, ni se ha encargado de instalar las correspondientes señales preventivas y ii) cuando unos escombros u obstáculos permanecen abandonados en una carretera durante un periodo razonable, sin que hubieren sido objeto de remoción o demolición para el restablecimiento de la circulación normal de la vía.”⁶

En este sentido, el Consejo de Estado ha determinado cuáles son los escenarios en los que se puede predicar una falla del servicio a cargo de una entidad encargada del mantenimiento vial. Estos escenarios guían a los demandantes respecto a los presupuestos que deben probarse si se quiere la declaración de responsabilidad de una entidad bajo una falla del servicio.

En este caso, el demandante no cumplió con la carga que le impone el artículo 167 del Código General del Proceso, pues no demostró que previamente se le haya dado aviso al Municipio de la existencia del hueco en la malla vial que aparentemente ocasionó el accidente del señor Robinson León Rengifo (como exige la primera de las premisas reconocidas por el Consejo de Estado); igualmente, no demostró que dicho hueco estuviese en ese sitio durante un periodo razonable, pues no indica ni siquiera el tiempo en el que se encontraba el mismo en la vía (como exige la segunda premisa).

3.4. Falta de idoneidad del dictamen pericial

El artículo 226 del Código General del Proceso -CGP- indica los requisitos de procedencia de la prueba pericial. En primer lugar, exige que todo dictamen debe ser claro, preciso, exhaustivo y detallado; y también debe explicar los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuadas, lo mismo que los fundamentos técnicos, científicos o artísticos de sus conclusiones. De esta manera, se observa en el informe de peritaje que la perito mencionó haber utilizado fundamentos y procedimientos extraídos de universidades especializadas en la materia:

⁶ Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativo, Sección Tercera Sentencia de 9 de junio de 2010 M.P. Gladys Agudelo Ordoñez.

GRADO DE ACEPTACION DE LOS PROCEDIMIENTOS

Los fundamentos y procedimientos que se explican en este dictamen son extraídos de los diferentes análisis de Universidades Especializadas en la materia como son los tratados internacionales sobre accidentes automovilísticos y se encuentran debidamente avalados en norma y reglamentarios de nuestra patria.

(Pág. 58 anexos de la demanda, subrayado propio)

No obstante, en primer lugar, el informe del peritaje no detalla los procedimientos utilizados para medir las condiciones de la vía, ni fundamenta adecuadamente la afirmación de que el hueco es la causa eficiente del daño. La conclusión de la perito carece de argumentos detallados, claros y precisos, ya que solo describe el lugar de los hechos sin ofrecer un razonamiento que explique por qué lo considera la causa del daño. En segundo lugar, dado que el peritaje debe aclarar asuntos técnicos, es crucial exponer las fuentes de conocimiento utilizadas, garantizando que la declaración se alinee con el conocimiento científico reconocido. Este informe no menciona universidades especializadas que avalen sus procedimientos ni tratados internacionales de referencia, lo que lo hace insuficiente para acreditar la causa del daño.

Por otra parte, si bien dentro del informe se plantea una descripción de las medidas del hueco, la perito nunca menciona la forma en la que midió los mismos, además de los método, exámenes y experimentos utilizados para obtener la información. Métodos que, además, deben ser comparados con las técnicas utilizadas en otros peritajes, que indique la coherencia entre los mismos, o de lo contrario, se deberá explicar las razones que la llevaron a utilizar técnicas diversas a las utilizadas en el ejercicio regular de su profesión u oficio, tal y como se establece en los numerales 8 y 9 del artículo 226 del CGP. Así, teniendo en cuenta que no se explican dichas técnicas de medición, el informe pericial carece de procedencia como prueba de la relación de causalidad.

Por último, el artículo citado en el numeral 5 también exige que con el peritaje se aporte una lista de casos en los que haya sido designado como perito o en los que haya participado en la elaboración de un dictamen pericial en los últimos cuatro años, incluyendo el despacho en donde se presentó, el nombre de las partes, de los apoderados de las partes y la materia sobre la cual versó el dictamen. Lo anterior, puesto que esto permite inferir la experiencia para dar sus afirmaciones. No obstante, dicha lista no se aportó, y resulta relevante además mencionar que este peritaje fue producido en mayo de 2022, cuando Juana Valentina Zapata contaba con menos de un año de experiencia ejerciendo en su profesión, así lo indica el certificado de asistencia a diplomado en INCOSVAL que la acredita como perito

en investigación de accidentes de tránsito.



(Pág. 67 anexos de la demanda, subrayado propio)

En conclusión, la mencionada prueba no debe ser tenida en cuenta toda vez que no cumple con los requisitos del CGP de procedencia, en donde se explique de forma clara, precisa, detallada y exhaustiva los métodos, procedimientos y fundamentos utilizados para establecer sus conclusiones, y no es posible constatar la idoneidad y experiencia del perito en el área a partir de publicaciones o peritajes realizados con anterioridad.

3.5. Excesiva valoración de los perjuicios inmateriales

En el presente caso, el demandante solicita que se paguen 100 SMLMV por concepto de daños morales y 100 SMLMV por concepto de daño a la salud, tanto para este como víctima directa como para su compañera permanente, sus dos hijos y su hermano. No obstante, no debe perderse de vista que en el evento en que se logre endilgar una responsabilidad y/o un daño resarcible a cargo del Distrito, dicho daño solo debe repararse en su justa medida y de conformidad con las pautas jurisprudenciales aplicables en nuestro país, sin perder de vista el carácter subjetivo que necesariamente implica la tasación de los perjuicios inmateriales. Para esto, el operador judicial debe acudir a criterios jurisprudenciales que le permitan tasarlos en justa medida.

Aunque no hay lugar al reconocimiento del perjuicio moral y el daño a la salud, pues el daño que se alega no le es atribuible al Distrito, en el eventual pero poco probable caso en el que en el presente proceso sea proferida una sentencia condenatoria, su despacho no debe acceder a las pretensiones de los demandantes, ya que estas debieron haber estado acordes con la naturaleza de los intereses quebrantados, lo que en este caso no sucede. Sin pretender con esto avaluar un daño que por su naturaleza es inestimable.

No en pocas sentencias, el Consejo de Estado se ha referido sobre la forma de tasar el monto del daño moral, y sobre lo que implica la reparación de este perjuicio, sobre lo cual estima lo siguiente:

“(L)as características mismas que ofrece el hecho generador de responsabilidad, partiendo de la premisa de que reparar valores morales por la vía del "arbitrium iudicis" no busca crear ganancias para, nadie, sino corregir con -sentido de justicia, satisfacer o desagraviar sentimientos heridos sin derecho.” (destacado fuera del texto original).

Así pues, la indemnización por perjuicio moral y daño a la salud solo debe ser motivo de reparación y no de enriquecimiento, por lo que solo debe otorgarse en la medida que repare el daño. En esa medida deberá indemnizarse los perjuicios que se acrediten. Así, el juez evaluará la gravedad de las lesiones y, basándose en un porcentaje de afectación, determinará la valoración de los perjuicios. En este caso, el demandante sufrió fracturas en rodilla derecha, que posterior a intervención quirúrgica tuvo evolución con tendencia a la mejoría, según los registros médicos para el egreso de clínica:

ANÁLISIS Y PLAN
PACIENTE CON DIAGNÓSTICOS ANOTADOS, **CON EVOLUCIÓN CON TENDENCIA A LA MEJORA**, QUIEN EL DÍA DE HOY VA A SER LLEVADO A REVISIÓN DE COLGAJO E INJERTOS Y SEGÚN HALLAZGOS SE DEFINIRÁN CONDUCTAS A FUTURO, POR EL MOMENTO CONTINÚA MANEJO ANTIBIÓTICO CON CEFEPIME POR INFECCIÓN CON E. CLOACAE, INFECTOLOGÍA INDICÓ QUE DEBE COMPLETAR 6 SEMANAS DE MANEJO EL CUAL PUEDE SER ORAL CON CIPROFLOXACINA.
POR EL MOMENTO CONTINÚA MANEJO MÉDICO INSTAURADO. SEGUIMIENTO POR ORTOPEDIA.

(Pág. 149 anexos de la demanda, subrayado propio)

Así, es relevante tener en cuenta que después de su egreso de la clínica, no hay evidencia de que el demandante asistió a terapias de ortopedia, tampoco expresa en las historias clínicas la presencia de secuela, o disminución de sus capacidades motrices. Considerando estos aspectos, la sana lógica permite afirmar que la magnitud del daño puede encontrarse entre el 10% y el 20%. Por lo tanto, una eventual pero poco probable condena no debe sobrepasar una indemnización por un valor de 20 SMLMV para la víctima directa, tanto para el perjuicio moral como para la salud. Frente al daño moral para los familiares, teniendo en cuenta los niveles fijados por la jurisprudencia del Consejo de Estado, para su compañera permanente e hijos una eventual condena no debe sobrepasar una indemnización por un valor de 20 SMLMV para cada uno, y 10 SMLMV para su hermano.

Ahora bien, respecto al daño a la salud solicitado para los familiares, se debe recordar la sentencia del 28 de agosto de 2014 del Consejo de Estado⁷, en la cual se unifica el contenido del perjuicio mencionado, además de su dinámica en las lesiones temporales, se plantea que esta tipología es reconocida única y exclusivamente a la víctima directa. Así, el Consejo de Estado establece que en los casos en que el daño provenga de una lesión corporal, el reconocimiento de la indemnización a título de daño a la salud únicamente está dirigido a resarcir económicamente una lesión o alteración a la unidad corporal de la persona, esto es, la afectación del derecho a la salud del individuo afectado. En

⁷ Consejo de Estado, Sección tercera. Consejera ponente: Olga Mérida Valle de la Hoz. 28 de agosto del 2014. Rad. 1999-326

consecuencia, en una eventual condena este perjuicio no debe ser reconocido para los familiares (compañera permanente, hijos y hermano), toda vez que resulta incompatible con el concepto de este daño y no están acordes con la naturaleza de los intereses quebrantados.

Por último, aunque es posible que el demandante haya sufrido lesiones con una afectación aproximada entre el 10% y 20%, los perjuicios inmateriales reclamados requieren más que simplemente probar el daño. También es necesario demostrar cómo estos afectaron su vida personal, como en su desempeño social y sus actividades diarias. Así, para el daño a la salud, el demandante tiene que acreditar cuales fueron las distorsiones que tuvo frente a su relacionamiento con las actividades cotidianas, lo cual no se encuentra detallado. De la misma forma, en el escrito de la demanda se establece que el señor Robinson León y sus familiares “han sufrido mucho moralmente con la grave lesión”, pero esto se establece de manera generalizada, y sin explicar específicamente cuales fueron las afectaciones y cómo fueron causadas por el incidente.

Tampoco se aportó elementos probatorios, como un análisis psicológico, que demuestren la presencia de dicho daño moral en su vida posterior al accidente. En consecuencia, dado que no se proporcionan justificaciones ni pruebas suficientes en este sentido, la compensación económica solicitada para ambos perjuicios, tanto moral como a la salud, resulta inestimable y no debe concederse bajo ninguna circunstancia.

3.6. Ausencia de acreditación del lucro cesante

El demandante solicita el reconocimiento de perjuicio material en la modalidad del lucro cesante pasado por cuanto alega que no pudo volver a realizar sus labores independientes en calidad de conductor de vehículos pesados, esto por un valor de ochenta y cuatro millones setecientos noventa y siete mil novecientos setenta y dos pesos (\$84.797.972). Sin embargo, este perjuicio no debe ser reconocido por ausencia probatoria respecto al ejercicio de una actividad económica al momento del accidente, y a la disminución de la capacidad laboral.

El Consejo de Estado ha interpretado el lucro cesante como la pérdida de ganancias o beneficios económicos que no se materializan debido al daño sufrido, y que, de no haber ocurrido el daño, habrían ingresado al patrimonio de la víctima. Sin embargo, señala que, al igual que cualquier otro tipo de perjuicio, para que proceda su compensación, debe ser comprobado. Así, la sección tercera de esta autoridad expresa:

“la ganancia frustrada o el provecho económico que deja de reportarse y que, de no producirse el daño, habría ingresado ya o en el futuro al patrimonio de la víctima. (sic) Pero

que (sic) como todo perjuicio, para que proceda su indemnización, debe ser cierto, como quiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a reparación alguna”⁸ (Destacado fuera del texto original)

En esta misma línea, el Consejo de Estado⁹ ha abordado el tema del reconocimiento del lucro cesante para trabajadores informales, estableciendo que este reconocimiento se limita a los casos en los que la víctima se encontraba realizando una actividad productiva en el momento en que se produjo el daño. Asimismo, en la misma línea jurisprudencial, se establece que el juez solo puede dictar una condena si, basándose en las pruebas presentadas en el expediente, se demuestra que la posibilidad de obtener un ingreso era cierta. En otras palabras, la compensación corresponde a la continuación de una situación previa o a la realización efectiva de una actividad productiva lícita que ya estaba establecida.

En el caso en concreto, el demandante aporta únicamente la certificación de ingresos de una contadora pública para afirmar que su ingreso era de 1’500.000 pesos, no obstante, no se aporta el soporte de los libros contables, transacciones o movimientos bancarios que soporten dicha actividad y permitan su verificación, tal y como lo menciona el Consejo Técnico de Contaduría Pública¹⁰

“Las certificaciones emitidas por un contador siempre deben tener un soporte que evidencie que dicha certificación contiene información capaz de ser verificable por parte de un tercero, dicha evidencia puede ser los libros de contabilidad del comerciante, soportes externos de transacciones, contratos, extractos bancarios, entre otros.” (subrayado propio)

De tal forma, es necesario que para tomar como cierta dicha prueba, los documentos mencionados sean aportados al expediente para que se evidencie de manera clara y precisa la realidad económica del señor Robinson León Rengifo al momento del accidente. La contadora pública debe conservar los mismos por un periodo de 5 años a partir de su elaboración según lo dispuesto en el artículo 9 de la ley 43 de 1990, y aportarlos cuando fuesen requeridos por autoridad competente:

“Los contadores públicos que suscriban certificaciones de ingresos de personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, deben preparar el certificado de manera clara, precisa, soportadas en documentos idóneos donde se demuestre la realidad económica y/o los ingresos de estas personas. En este caso, el profesional de la contaduría pública conservará copia de los soportes utilizados para realizar dichas afirmaciones, que le sirvan para rendir

⁸ Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 7 de julio de 2011, exp. 18.008.

⁹ Consejo de Estado, Sala Plena Sección Tercera, sentencia del 18 de julio de 2019, exp. 44.572.

¹⁰ Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Consulta 1-2018-015978. 10 de junio de 2018.

explicaciones posteriores a su cliente, o cuando sean requeridos por la autoridad competente."¹¹ (subrayado propio)

En concordancia con el artículo 262 del Código General del Proceso, se debe realizar la debida ratificación de la certificación de ingresos, con los soportes contables con los que se determinó tal promedio de ingresos, en aras de considerarlo un medio probatorio útil, pertinente y conducente en el proceso.

Adicionalmente, en una eventual, pero poco probable condena indemnizatoria, no solo se debe demostrar la realización de una actividad económica en el momento del accidente, sino también en qué medida las lesiones sufridas han afectado su capacidad para trabajar o han requerido una adaptación de sus funciones laborales. En este sentido, es importante señalar la jurisprudencia establecida por la Corte Suprema de Justicia, que indica que dicho perjuicio debe ser probado por el demandante, demostrando cómo han variado sus circunstancias laborales mediante un dictamen de pérdida de capacidad laboral:

“tratándose de daño a las personas, en no pocas veces está ligado a la productividad del individuo, debido a la disminución de sus ingresos por la pérdida del empleo, o variación de las circunstancias personales como consecuencia del insuceso, por lo que esta Corte para efectos de esa tasación ha tomado en consideración la pérdida de capacidad laboral que aquel enfrente y a partir de allí y los criterios actuariales que indican las normas antes citadas obtener la cuantía de la indemnización.” ¹²(destacado fuera del texto original).

En este contexto, si el demandante consideró que su estado de salud le impedía ejercer sus labores, debió solicitar a su EPS la atención médica correspondiente para que se asignaran las respectivas incapacidades temporales, además de realizar un plan integral de tratamiento. Este plan debería incluir el monitoreo y evaluación del proceso de rehabilitación cada sesenta (60) días calendario para valorar el avance de su capacidad laboral, asegurando así un seguimiento adecuado de la recuperación. Asimismo, se debió emitir el concepto de rehabilitación antes de cumplirse el día ciento veinte (120) de la incapacidad de origen común, conforme a lo establecido en los artículos 2.2.3.5.1. y 2.2.3.5.2. del decreto 1427 de 2022. A su vez, el señor Robinson León Rengifo, a través de la EPS debió obtener el pago de estas incapacidades laborales, que por ley no son inferiores al salario mínimo, desde el día 3 hasta el 180, y desde el día 181 hasta el 540, a cargo del fondo de pensiones al que se realicen las cotizaciones.

De esta manera, para poder estimar el perjuicio por lucro cesante pasado y futuro debido a

¹¹ Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Consulta 1-2018-015978. 10 de junio de 2018.

¹² Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil. SC506-2022 del 17 de marzo de 2022. Magistrado ponente Hilda Gonzalez Neira.

la imposibilidad de ejercer sus labores, es necesario probar la pérdida de la capacidad laboral (PCL). La PCL no se determina de forma subjetiva por parte del demandante, sino que se basa en parámetros objetivos establecidos por ley. Según lo dispuesto en el artículo 41 de la ley 100 de 1993, la PCL se determina a través de un dictamen emitido por alguna de las siguientes entidades, según el caso: Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, Administradoras de Riesgos Profesionales ARP, Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, Entidades Promotoras de Salud EPS, Juntas Regionales de Calificación de Invalidez y Junta Nacional de Calificación de Invalidez.

Por consiguiente, en caso de una eventual indemnización, esta deberá sustentarse en un PCL debidamente emitido y justificado por alguna de las entidades mencionadas. Dado que dicho documento no figura en el expediente, ni se dispone de prueba que respalde que el demandante acudió a su EPS debido a su incapacidad para trabajar con normalidad, el perjuicio en su patrimonio desde el momento del accidente hasta la presentación de esta demanda es completamente incierto. En tanto, el reconocimiento del lucro cesante pasado y futuro no debería considerarse en absoluto

3.7. Excepción genérica

Me refiero con ello a cualquier hecho o derecho a favor de mi mandante, que resultare probado dentro del proceso, toda vez que el juez oficiosamente debe declarar probadas las excepciones que resulten de los hechos acreditados en el expediente de conformidad con el artículo 282 del Código General del Proceso. Por lo anterior, le solicito a su despacho declarar probada cualquier otra excepción que resulte acreditada a lo largo del proceso frente a la demanda.

III. CONTESTACIÓN AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

1. FRENTE A LOS HECHOS

AL HECHO PRIMERO.- Es cierto que en su Despacho se adelanta proceso de reparación directa contra el Distrito Especial de Santiago de Cali, radicado bajo el No. 76001-33-33-015-2023-00144-00 adelantado por el señor Robinson León Rengifo y otros.

AL HECHO SEGUNDO.- Es cierto que en el proceso referido el demandante busca radicar en cabeza del Distrito Especial de Santiago de Cali, el acaecimiento de los perjuicios ocasionados en supuesto accidente de tránsito ocurrido según el escrito de la demanda el día 07 de marzo de 2021.

AL HECHO TERCERO.- Es cierto que al momento de los hechos la Póliza Seguro Responsabilidad Civil Extracontractual No. 420-80-994000000181 se encontraba vigente, y en el evento de una condena, el Municipio puede solicitar el reembolso del valor que pague a las compañías coaseguradoras, siempre que se cumplan las condiciones generales y particulares del contrato de seguro.

2. FRENTE A LAS PRETENSIONES

La responsabilidad de SBS Seguros Colombia S.A. únicamente podrá verse comprometida, y en este sentido podrán prosperar las pretensiones del llamamiento en garantía, siempre que se profiera una condena en contra de la entidad asegurada y se cumplan las demás condiciones generales y particulares del contrato de seguro.

Igualmente, en el evento de condena, la responsabilidad de mi mandante se limitará a reembolsar el dinero que el Distrito deba pagar y no podrá ser condenada solidariamente a pagar a los demandantes pues éstos no ejercieron la acción directa que pudieron tener en contra de mi mandante.

No debe perderse de vista que la responsabilidad de SBS Seguros únicamente podrá verse comprometida siempre que se profiera una condena en contra de la compañía asegurada y se cumplan las demás condiciones generales y particulares del contrato de seguro. En ese orden de ideas, se formulan las siguientes:

3. EXCEPCIONES DE MÉRITO

3.1. Límite de la suma asegurada y condiciones del contrato de seguro

SBS Seguros Colombia S.A. solo estará llamada a responder en el escenario en que el asegurado sea declarado civilmente responsable del hecho dañino, y siempre y cuando se cumplan las condiciones particulares y generales de la Póliza No. 420-80-994000000181.

De no prosperar o solo hacerlo parcialmente las excepciones propuestas anteriormente o las que configuren hechos que eximan de responsabilidad a la asegurada y que sean debidamente acreditados durante el proceso, solicito que en la eventual condena en contra de mi representada se tenga como límite de la misma la suma asegurada en las condiciones de la póliza, esto es, teniendo en cuenta los límites, amparos, sumas aseguradas, deducibles, exclusiones, etc., de tal manera que se respeten los términos del contrato de seguro. En el evento de que los hechos que dieron origen a este proceso impliquen una de

las exclusiones pactadas en el contrato de seguro, la compañía aseguradora estará relevada de asumir obligación alguna. Las sumas aseguradas para el presente caso son las siguientes:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR
PATRIMONIO DEL ASEGURADO		\$ 7,000,000,000.00	
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES		7,000,000,000.00	

(Pág. 1 póliza No.42080994000000181, subrayado propio)

Y según certificado de coaseguro, el valor asegurado por SBS es el siguiente:

COBERTURA	LIMITE EVENTO	LIMITE AGREGADO
AMPARO DE PREDIOS-LABORES-OPERACIONES	\$ 1,400,000,000.00	\$ 1,400,000,000.00

Lo anterior, por supuesto, no constituye, bajo ninguna circunstancia, aceptación de responsabilidad alguna. Reitero que mi representada se opone a la prosperidad de las pretensiones formuladas en la medida que desconozcan las condiciones particulares y generales del contrato de seguro.

3.2. Disponibilidad del valor asegurado

La suma o valor asegurado es la cantidad fijada en cada una de las garantías de la póliza que constituye el límite máximo de la indemnización a pagar, en atención a los diferentes conceptos, por parte del asegurador en caso de siniestro. Es decir, la póliza tendrá cobertura de uno o diversos siniestros que puedan presentarse durante la vigencia de la póliza, sin que en ningún caso se pueda superar la indemnización total la suma o valor asegurado.

En tal virtud, en caso de proferirse una condena que implique una obligación a cargo de la aseguradora deberá tenerse en cuenta el monto disponible en ese momento exacto (de condena) y que, por supuesto, dependerá de la suma total de los pagos efectuados por SBS Seguros Colombia S.A que puedan haberse realizado con ocasión de otros siniestros presentados durante la misma vigencia. Pagos que podrán haberse presentado (o presentarse) derivados del mismo siniestro o de siniestros que nada tienen que ver con el que nos ocupa en este proceso, pero que en todo caso implican la afectación de la misma póliza. En consecuencia, deberán tenerse en cuenta tales pagos al momento de dictarse sentencia, providencia que necesariamente deberá hacer referencia al valor asegurado disponible para el momento en que se profiera el fallo en caso de que el mismo sea condenatorio. De tal suerte que si por los pagos que se hayan realizado con ocasión de

otros siniestros el valor asegurado se ha agotado, así deberá declararse en la sentencia y en tal caso la compañía que represento estará relevada de asumir pago alguno en este proceso.

3.3. Límite de responsabilidad de SBS Seguros Colombia S.A por coaseguro pactado en la póliza

En el caso que nos ocupa, existe un coaseguro pactado que implica que la responsabilidad en que incurra la asegurada Municipio de Santiago de Cali está cubierta simultáneamente por SBS Seguros Colombia S.A en un veinte por ciento (20%), por la Compañía de Seguros Colpatria en un diez por ciento (10%), por Chubb Seguros Colombia en un veintiocho por ciento (28%), y por HDI Seguros en un diez por ciento (10%). En la sección de coaseguro cedido de la Póliza No. 42080994000000181 que da cuenta del contrato de seguro que se hace valer en este asunto, expresamente se precisa la participación de cada una de las compañías aseguradoras.

COASEGURO CEDIDO			VALOR ASEGURADO
NOMBRE COMPAÑIA	%PART		
CHUBB SEGUROS COLOMBIA	28.00		
SBS	20.00		
COLPATRIA	10.00		
HDI SEGUROS	10.00		

(Pág. 1 póliza No.42080994000000181, subrayado propio)

El artículo 1095 del Código de Comercio que se encuentra a continuación de las normas que regulan la coexistencia de seguros se refiere a este tipo de eventos y estipula que “*las normas que anteceden se aplicarán igualmente al coaseguro, en virtud del cual dos o más aseguradores, a petición del asegurado o con su aquiescencia previa, acuerdan distribuirse entre ellos determinado seguro*”.

Así las cosas, el límite de responsabilidad de Allianz Seguros S.A. es proporcional al riesgo asumido, esto es, hasta el veintitrés por ciento (23%) del valor del siniestro. Lo anterior sin perjuicio de condiciones adicionales como pudiere ser la aplicación de deducible.

3.4. Excepción genérica

Me refiero con ello a cualquier hecho o derecho a favor de mi mandante, que resultare probado dentro del proceso, toda vez que el juez oficiosamente debe declarar probadas las excepciones que resulten de los hechos acreditados en el expediente, de conformidad con el artículo 282 del Código General del Proceso.

4. PRUEBAS

4.1. Documentales

4.1.1. Certificado de coaseguro No. 1000253 de la Póliza No. 42080994000000181.

4.2. Citación a perito

Conforme al inciso primero del artículo 228 del Código General del Proceso, solicito se cite a JUANA VALENTINA ZAPATA VASQUEZ, con el fin de realizar la contradicción del dictamen técnico por ella elaborado y presentado con la demanda.

4.3. Ratificación de documentos

4.3.1. Solicito la ratificación de la certificación de ingresos económicos emitida por la contadora Laurentina Arboleda Padilla, identificada con cédula de ciudadanía No. 31.322.928 y matrícula profesional No. 193564-T. Esta solicitud se fundamenta en el Artículo 262 del Código General del Proceso, el cual establece que los documentos privados de contenido declarativo emanados de terceros se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, a menos que la parte contraria solicite expresamente su ratificación. En este sentido, solicito que se aporten los documentos utilizados para la elaboración de la certificación de ingresos emitida, tales como libros contables, transacciones bancarias, contratos u otros pertinentes, con el fin de corroborar la veracidad de la declaración realizada.

5. ANEXOS

5.1. Poder para actuar.

5.2. Certificado de existencia y representación legal de SBS Seguros Colombia S.A.

5.3. Certificado de existencia y representación legal de Hurtado Gandini Dávalos Abogados S.A.S.

6. NOTIFICACIONES

6.1. Mi poderdante, la compañía SBS Seguros Colombia S.A., las recibirá en la Avenida 9N # 101-67, Piso 7 de Bogotá D.C., y en el correo electrónico: notificaciones.sbsegueros@sbsegueros.co.

6.2. Los demandantes, los demandados y el llamante en garantía en las direcciones por ellos aportadas.

6.3. El suscrito las recibirá en la Calle 22 Norte # 6AN-24, Oficinas 901 y 902, Ed. Santa Mónica Central, del Distrito Especial de Santiago de Cali y en los correos electrónicos: oarango@hgdsas.com, idrobles@hgdsas.com, cdperez@hgdsas.com y notificaciones@hgdsas.com

Atentamente,



FRANCISCO J. HURTADO LANGER

T.P. 86.320 del C.S. de la J.

Representante legal y abogado designado de
HURTADO GANDINI DAVALOS ABOGADOS S.A.S.
NIT 805.018.502-5